

**NO SE APAGA  
EL FUEGO  
CON GASOLINA**

La salida política  
del conflicto armado

# Persistencia de conflictos armados en las regiones

Camilo González Posso  
Indepaz

Colombia es un país de regiones que se han delineado históricamente por las formas de poblamiento, relaciones con la geografía y los recursos naturales, desarrollo socioeconómico, conformación étnica y cultural, entre otras variables. También los conflictos políticos, socioeconómicos y los conflictos armados han tenido particularidades regionales cambiantes: han sido centrípetos en fases de iniciativa de fuerzas irregulares, y centrífugo cuando la iniciativa le ha correspondido a las fuerzas de orden. En fases centrípetas los conflictos armados se han dirigido a los centros estratégicos del poder y la economía, hacia los centros urbanos o sus cercanías, hacia las zonas ricas en recursos naturales. En las fases centrifugas los epicentros de confrontación armada y violencias son desplazados a la periferia, a zonas de retaguardia económica y territorial.

La realidad es siempre más complicada que los esquemas y además nada es homogéneo cuando se trata de dinámicas de conflictos violentos y menos cuando se entremezclan confrontaciones propias de la relación insurgencia –contrainsurgencia con actores nacionales e internacionales interesados en la acumulación violenta de

riquezas y de poder, con mafias, organizaciones de criminalidad transnacional, narcotráfico y empresas oportunistas que aprovechan los ambientes violentos y que tienen como parte de su función de producción el lavado de activos, la captura del Estado y de rentas públicas.

Pero no obstante la complejidad, puede decirse que desde el inicio de las conversaciones en La Habana, y más con la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, se aceleró el proceso de dispersión de las conflictividades armadas y de transformación de conflictividades estructurales. Como ha ocurrido en el pasado en Colombia y en otros países en los meses e incluso años siguientes a la firma de acuerdos y dejación de armas se producen reacomodos con incremento de pequeños grupos y disputas violentas por control de posiciones; luego se imponen nuevos órdenes que tienden a disminuir en impacto general de violencias y lo hacen según la implementación de los acuerdos, la dinámica de incorporación social de poblaciones y regiones y las estrategias de seguridad y restablecimiento del Estado de Derecho.

Desde inicios del Siglo XXI se hizo evidente el avance hacia el control estratégico



32

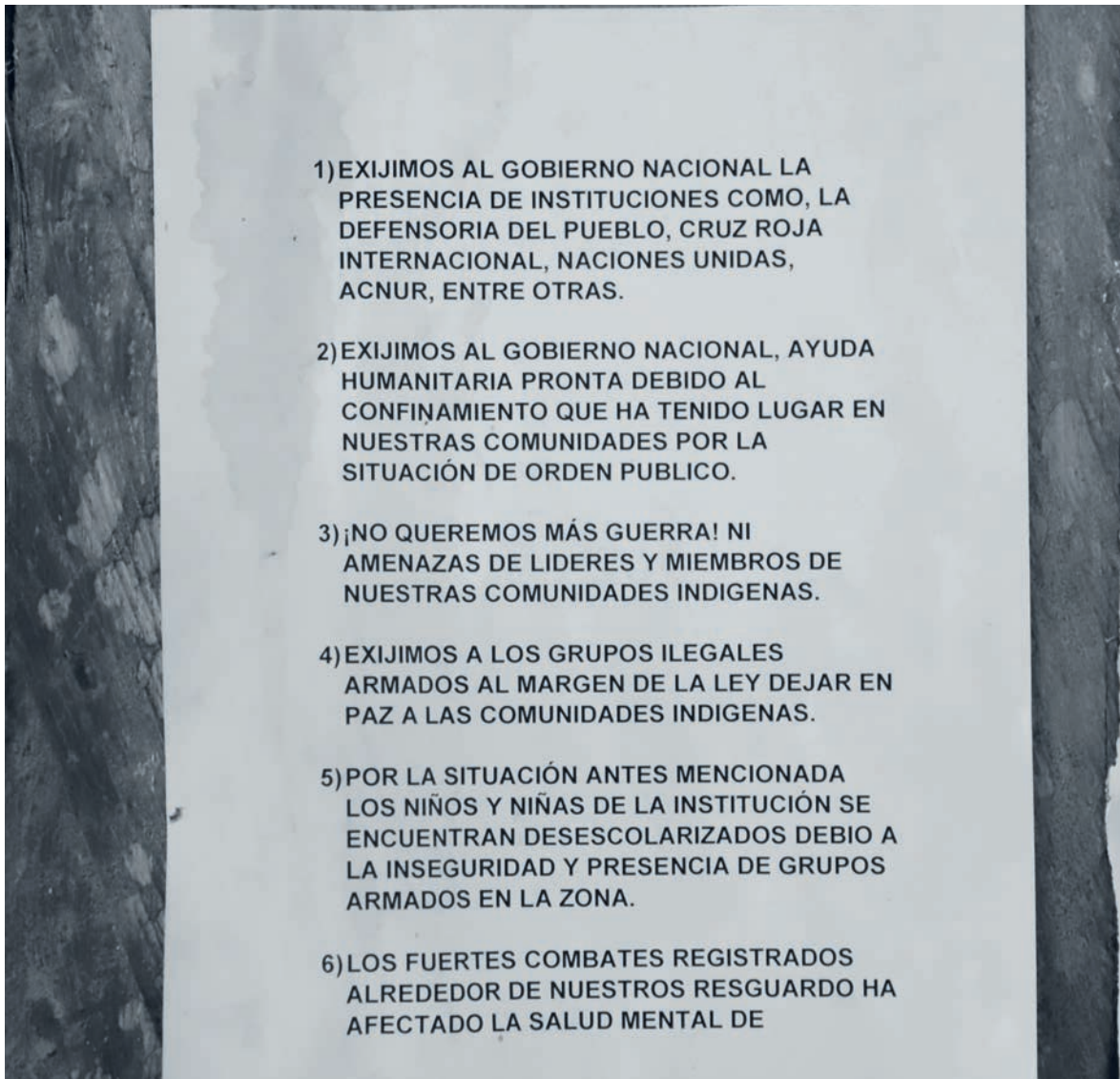
por parte del Estado y de grupos paramilitares en el centro del país, grandes ciudades y regiones clave en industrias extractivas y agroindustriales. Después de la desmovilización de las AUC y otros bloques, paramilitares/narco-paramilitares quedaron herederos en algunos territorios y la iniciativa hacia la consolidación territorial se le atribuyó a la fuerza pública. La guerra contrainsurgente contra las Farc-ep y el ELN inclinó la balanza cada vez más a favor del Estado y de los sectores económicos y políticos comprometidos en

la guerra como parte de sus empresas y posiciones de poder. Los territorios en disputa pasaron a ser los de la retaguardia de las guerrillas y las nuevas fronteras de penetración de macro-proyectos extractivos, infraestructura o concentración abusiva de tierras.<sup>126</sup>

Con el desmonte de las Farc-ep y el repliegue de excombatientes a las tareas de incorporación política y social, cambió sustancialmente el juego de fuerzas en los territorios en los cuales tenía influencia o impactos con las ar-

---

<sup>126</sup> González Posso C, 2017. "El complejo paramilitar se transforma". Indepaz. Bogotá D.C. agosto de 2017.



33

mas; también cambió el balance de armas en territorios vecinos a las áreas de operación o de economías de guerra y en las interrelaciones con grupos armados ilegales de diversa índole en la disputa por el control territorial y poblacional. Esos cambios se han operado de manera directa en cerca de 250 municipios de lo que eran las zonas de influencia y la retaguardia de las Farc-ep; al mismo tiempo se han generado reacomodos en los 150 mu-

nicipios de patrullaje o presencia frecuente del ELN y en los 300 que tenían impactos directos de grupos narco-paramilitares, herederos de las AUC, Bloque Central Bolívar, Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia y otros. Descontando superposición de municipios en estas cuentas, los reacomodos post dejación de armas por parte de las Farc-ep han venido ocurriendo en no menos de 350 municipios.<sup>127</sup>

---

127 INDEPAZ, 2018. Conflictos armados focalizados. <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/12/ConflictosArmados-Focalizados-Indepaz-4.pdf>

## ■ Diálogos con el ELN en un callejón sin salida

El ELN ha desplegado fuerzas para intentar evitar que narco-paramilitares, fuerza pública o reductos no desmovilizados de las FARC afecten sus áreas de influencia, y al tiempo ha movido sus efectivos hacia algunas posiciones estratégicas antes controladas por las Farc-ep. Así ha ocurrido en Chocó, hacia Riosucio, San Juan y también en Quibdó y vecindades; también en el norte de Nariño y zona Pacífico del Cauca. En Catatumbo se precipitó desde 2016 la confrontación del ELN con los Pelusos (EPLs) no sólo por áreas de anterior presencia de las Farc-ep sino por avanzadas de éstos en territorios de vieja influencia del ELN. Y en Arauca la iniciativa del ELN se dio para intentar neutralizar el mayor control por parte de la Fuerza Pública. Durante el último año el ELN se ha convertido en prioridad de las ofensivas de las Fuerzas Armadas en sus tradicionales áreas de presencia, incluida la región del oro en el Magdalena Medio, Bajo Cauca y Chocó.

Algunos estudios estiman que el ELN amplió lentamente sus áreas de operación en los 36 meses siguientes a los acuerdos de paz y ha realizado reclutamiento de jóvenes en nuevas zonas sin que esto signifique una modificación sustancial de su capacidad militar y su influencia política local o regional.<sup>128</sup>

El ELN decidió en su V Congreso dialogar con el gobierno sólo para explorar posibilidades de una solución negociada y en los intercambios con los delegados de la administración Santos avanzaron en procedimientos y agendas para el inicio formal de conversaciones sin llegar a esta nueva fase.<sup>129</sup> El gobierno de Iván Duque cambió los términos de ese diálogo, clausuró la mesa que venía funcionando en La Habana y colocó como condición para reanudar conversaciones el cese unilateral de “actividades criminales” por parte del ELN, incluido reclutamiento de infantes y adolescentes, secuestros, uso de minas antipersona y concentración previa de efectivos. La mesa ha quedado en el vacío: el gobierno en realidad pide el sometimiento y el ELN parece decidido a no negociar con este gobierno y mantiene la posición de *conversar para explorar y mantener un escenario político* siguiendo la ruta iniciada en el gobierno de Santos.

## ■ Se recompone el narco-paramilitarismo

Los narco-paramilitares conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (en adelante AGC) o Clan del Golfo siguen teniendo presencia importante en el noroccidente, con base principal en Urabá, Córdoba, Bajo Cauca Antioqueño, Chocó y prolongaciones en Norte de Santander. Tienen articulaciones y agentes en el Valle de Aburrá (Oficina, Los Pachely, otras bandas) y

---

<sup>128</sup> *Ibid*

<sup>129</sup> Voces ELN 2015 y 2019.

entronques con los carteles mexicanos del narcotráfico. Su centro de gravedad armado puede estar en Urabá y vecindades pero su centro estratégico de poder, relaciones empresariales y lavado de activos parece estar en el área metropolitana de Medellín.

En los dos últimos años la estructura de las AGC - Clan del Golfo parece haberse debilitado por la acción de la fuerza pública y sus propias pugnas internas. La discusión sobre posible sometimiento o sujeción a la justicia desató enfrentamientos violentos entre mandos; el retorno de ex paramilitares movió el tablero y la lucha por el control de zonas de minería del oro y rutas. La ruptura mayor se ha dado con el grupo llamado los Caparrapos de vieja influencia de Macaco y Cuco Vanoy (Bloque Minero). También se ha debilitado su presencia directa en la zona de Buenaventura en donde se imponen mafias emergentes aliadas de los carteles mexicanos; en el sur del Pacífico (Cauca y Nariño) el ELN los ha enfrentado e importantes agentes de las AGC han sido derrotados por los nuevos grupos rearmados después de la dejación de armas de las Farc-ep. Las operaciones de la Fuerza Pública han golpeado en particular a la fracción de Otoniel y sus mandos, contribuyendo al fraccionamiento de las AGC. En el último año han tenido presencia en cerca de 190 municipios, principalmente del noroccidente y grupos propios o aliados

en Bolívar, Cesar, La Guajira, Meta, Putumayo y Caldas. En otros departamentos han tenido incursiones menores.<sup>130</sup>

Otros grupos narco-paramilitares de menor influencia siguen actuando en Meta y Casanare (Los Puntilleros, ex ERPAC), Magdalena y Guajira (Los Pachencia), en Putumayo (La Constru), Nariño (Contadores) y otras regiones. Todos alimentan grupos de sicarios o de cobro que les sirven a sus prácticas mafiosas.

Los narco-paramilitares, sucesores de los paramilitares desmovilizados en 2005-2006 han mostrado gran capacidad de alianzas con parapolíticos y con agentes del Estado, tal como lo han evidenciado denuncias de la jerarquía católica en Chocó y de la Comisión de Paz del Senado por acontecimientos recientes en Tierralta,<sup>131</sup> y la captura de miembros del Ejército transportando pertrechos para las AGC desde Bogotá a Urabá el 1 de julio de 2019.<sup>132</sup> La captura del jefe de la Constru en Bogotá destapó que desde tiempo atrás residía en el Cantón Norte del Ejército.<sup>133</sup> Estos hechos y antecedentes de complicidad y corrupción de agentes de la Fiscalía detenidos en Tumaco en 2017 y 2018 son parte de investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y evidencias sobre servicios mutuos entre grupos de criminalidad organizada y ciertos agentes del Estado.

<sup>130</sup> Indepaz, *Op. Cit.*

<sup>131</sup> Declaración de monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó en la sesión con la Secretaría Técnica de la CNGS realizada en junio de 2019. Ver también <https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/hay-un-resurgimiento-de-grupos-paramilitares-y-de-la-parapolitica-roy-barreras/20190628/nota/3920659.aspx>

<sup>132</sup> Ver <https://noticias.caracoltv.com/antioquia/cae-camion-del-ejercito-con-dotacion-oficial-que-al-parecer-iba-para-grupos-ilegales-de-uraba>

<sup>133</sup> Ver <https://noticias.caracoltv.com/colombia/hay-mas-militares-trabajando-para-narcos-de-la-constru>





## Rearmados y disidentes post dejación de armas de las Farc-ep: violencias sin futuro

Un fenómeno nuevo después de la dejación de armas por las Farc-ep ha sido la proliferación de pequeños grupos rearmados por milicianos o ex-miembros de las FARC que decidieron organizarse para prestar servicios de seguridad y control al narcotráfico en algunas regiones como la costa nariñense, norte del Cauca, Caquetá, Catatumbo, Arauca y Bajo Cauca. Son grupos locales sin conexión entre sí ni propósito político y que incluso se enfrentan por territorios o relaciones con los dueños del negocio ilegal. Aunque son de alta agresividad y sin mandos ni protocolos, en conjunto tienen menor capacidad de daño o de confrontación que lo que se les reconocía a los frentes de las Farc-ep en esos territorios. La tendencia, como ha ocurrido en el pasado, es la proliferación al inicio del post-acuerdo y reagrupamiento en la medida en que se imponen los más fuertes y con capacidad de dirigir la violencia. Y corresponde a dinámicas delincuenciales sin posibilidades de articulación insurgente.

Paralelamente a ese rearme residual se ha presentado la persistencia de disidencias o frentes de las Farc-Ep que no aceptaron los acuerdos de paz y siguen en sus estructuras armadas y en sus negocios. El más nombrado es el Frente que dirige Gentil Duarte y se afirma que mantiene relaciones con pequeños grupos en Cauca, Caquetá, Putumayo y Bajo Cauca Antioqueño. Duarte ha intentado sin éxito atraer al grupo que dirigió El Guacho o Frente Oliver Sinisterra, al autonombrado

Guerrillas Unidas del Pacífico y a otros del Pacífico nariñense. Durante este periodo post-acuerdos ha mantenido sus áreas de influencia en Guaviare y hacia el oriente sin operaciones ofensivas contra la fuerza pública y en un estatus quo o colaboración con grupos narco-paras de zonas vecinas. De acuerdo con la dinámica que ha mostrado y el contexto regional y nacional, es poco probable que se convierta en el núcleo para una resurrección de las Farc-ep con posibilidades de abrir una nueva etapa de insurgencia y enfrentamiento por el poder o por la expansión de estructuras político militares hacia las regiones centrales de la economía y el Estado. No obstante estos límites, es posible que en el futuro inmediato estas disidencias aglutinen a otros y sirvan de refugio a reincidentes que firmaron los acuerdos y por algún motivo retornan a las armas.

Los grupos rearmados post acuerdo y las disidencias de las Farc-ep no tienen la capacidad de confrontación que éstas tenían en los años anteriores a las conversaciones de paz, en su fase de repliegue por la ofensiva contrainsurgente. En cuanto a municipios con alguna presencia los registros muestran que esos grupos actúan en menos del 30% de lo que impactaban las Farc-ep y que tienen menores posibilidades de perturbación del orden público pero con capacidad de mantener negocios violentos, servicios de seguridad a mafiosos y acciones de fuerza en cerca de 90 municipios.<sup>134</sup>

<sup>134</sup> Carlos Espitia Cueva, 2019. "Grupos armados post-desarme Farc Ep". En <https://www.nodal.am/2019/07/grupos-posdesarme-farc-ep-la-reconfiguracion-armada-en-colombia-por-carlos-eduardo-espitia-cueva/>



## Las violencias estructurales

Todos los grupos armados ilegales que persisten en el post-acuerdo mantienen negocios legales e ilegales para reproducirse, unos porque la razón de su existencia es el lucro y otros como el ELN porque la economía ilegal de sostenimiento para la lucha armada es parte de su estrategia. Pero, más allá de esas necesidades de reproducción, los narco-paramilitares y rearmados post-Farc-ep cumplen el papel de fuerza armada criminal al servicio de negociantes ilegales y de empresas que desde tiempo atrás están en la disputa por territorios y recursos y utilizan la violencia y contextos violentos para sus objetivos de acumulación.

Este modelo violento de acumulación fue parte de la guerra durante décadas en Colombia y en el post acuerdo con las Farc-ep está pasando a nuevas modalidades: lo que fue desplazamiento y despojo se transformó en concentración irregular de tierras y recursos para macro-proyectos, y en la fase actual se propone la normalización o formalización; las fronteras con la Amazonía y el Andén Pacífico son ahora objetivo de valor de acaparadores de tierra que utilizan grupos armados, deforestación, repoblamiento, para sus propósitos de acaparar tierras y recursos minero energéticos, incluidas zonas de reserva forestal y territorios colectivos. En las zonas de minería del oro la alianza o cohabitación con grupos armados narco-paramilitares y rearmados post-Farc-ep es frecuente en la entrada de grandes inversionistas y en la ampliación de sus proyectos sometiendo a los mineros tradicionales pequeños y medianos. Y por supuesto la cadena del narcotráfico tiene en el ADN la violencia que en la fase actual se recompone para darle continuidad a cultivos, producción, tráfico y lavado de activos.

## Respuesta tardía y militarizada desde el Gobierno

La astenia de la respuesta estatal y gubernamental a los retos del post acuerdo en el país y en las zonas más impactadas por confrontaciones armadas y operaciones de guerra ha dejado amplio margen a la recomposición de narco-paramilitares y de los grupos rearmados y disidentes por Farc-ep.

En primer lugar hubo fallas de previsión y preparación para la respuesta rápida, extraordinaria y efectiva a las nuevas conflictividades violentas y socioeconómicas. Esto se reflejó en lentitud y descoordinación de la acción estatal inter-agencial, desconfianza para una alianza con las comunidades y tramado social, en contraste con la velocidad de posicionamiento de mafias, narcotraficantes y grupos con intereses económicos acostumbrados a acumular en contextos y dinámicas violentas. Los trámites de montaje institucional para la implementación de los acuerdos y la oposición radical desde la ultraderecha ayudaron a demorar las medidas de nuevo control territorial y poblacional y le dejaron mayor margen a la recomposición violenta en las zonas más críticas por violencia en esta década.

Con el triunfo electoral de las fuerzas opuestas a temas centrales del Acuerdo de Paz, a los problemas de desfase y débil iniciativa se sumaron la falta de recursos y el freno desde el gobierno a la implementación de los acuerdos especialmente en los componentes de Reforma Rural Integral y programas territoriales de inclusión socioeconómica. En efecto, no se ha tenido una efectiva política de incorporación socioeconómica de poblaciones afectadas

por dinámicas violentas y armadas ni programas de seguridad humana y de reconversión económica de regiones con soluciones urgentes y ampliación de las libertades democráticas. Los planes y compromisos con comunidades se han quedado en el papel y con presupuestos marginales como ocurre con el Fondo de Tierras y la entrega efectiva de predios, con los PDETs reducidos a los recursos ordinarios, los planes de sustitución concertada se reducen a pagar parcialmente deudas de la administración pasada sin llegar a proyectos productivos sostenibles para las familias inscritas y menos para las 400.000 que están a la espera de la presencia social del Estado en las regiones con impacto de economías cocaleras.<sup>135</sup>

Las fuerzas armadas han desplegado varias operaciones para copar y controlar los territorios en donde estaban las Farc-ep antes del pacto de paz y las zonas de influencia de los nar-

co-paramilitares y rearmados post acuerdo que el gobierno denomina Grupos Armados Organizados. Esa presencia militar de control territorial se dirige en buena parte a la seguridad inversionista y contra “objetivos de alto valor”; por otro lado concentra efectivos y recursos en las campañas de erradicación forzada de cultivos de coca y de

ataque al narcotráfico. Las órdenes operacionales de las Fuerzas Armadas, ampliamente discutidas a partir de las alertas del New York Times y la revista Semana, muestran no sólo la presión de hecho por “falsos positivos” sino la concentración de recursos y mandos en detenciones y bajas a los llamados Grupos Armados Organizados, GAO, sin que se incluya indicadores de seguridad humana y articulación a programas sociales de real impacto.<sup>136</sup>



**El eje operativo no es ni seguridad como derecho ciudadano ni seguridad humana como enfoque de integralidad. La consecuencia, entre otras, es que las poblaciones en las zonas con historias recientes y continuadas de violencia, incluidas las que han estado atrapadas en economías ilegales, son asumidas como parte del problema, de las amenazas y riesgos, y no como los aliados estratégicos para la transición democrática a la consolidación de territorios de paz.”**

La orientación general en la política de seguridad y defensa aprobada como bases del PND es la seguridad para el emprendimiento, que privilegia la seguridad corporativa y el control del territorio desde la protección de macro-proyectos agroindustriales, de infraestructura y minero energéticos. El eje operativo no es ni seguridad como derecho ciudadano ni seguridad humana como enfoque de integralidad. La consecuencia, entre otras,

es que las poblaciones en las zonas con historias recientes y continuadas de violencia, incluidas las que han estado atrapadas en economías ilegales, son asumidas como parte del problema, de las amenazas y riesgos, y no como los aliados estratégicos para la transición democrática a la consolidación de territorios de paz.

<sup>135</sup> Congresistas independientes, 2019. “Balance de implementación del Acuerdo de Paz en el primer año de la Administración de Iván Duque.”

<sup>136</sup> Revista Semana, 2019. “¿Falsos positivos 2.0? La denuncia de ‘The New York Times’ contra el Ejército Nacional.” Semana 5/18/2019. Disponible en <https://www.semana.com/nacion/articulo/ordenes-de-letalidad-the-new-york-times-habla-de-positivos-falsos-positivos/615936>

## En resumen

Las confrontaciones armadas que persisten en regiones importantes de Colombia tienen impactos graves para la población y las economías pero son menores de los que se presentaban antes del acuerdo final entre las Farc-ep y el Estado. En cerca de la tercera parte de los municipios se registran confrontaciones armadas de diverso tipo y en 150 de ellos hay presencia armada del ELN. Los objetivos y características de las acciones armadas de los grupos narco-paramilitares, rearmados o residuales y disidentes de las Farc-ep se hacen más visibles por la disputa por territorios entre sí y con el despliegue de la Fuerza Pública.<sup>137</sup> Sin embargo, no confi-

guran un estado de guerra en el conjunto del país ni son el inicio de un nuevo ciclo de conflicto armado interno con perspectiva de disputar el poder del Estado o de acercarse a la situación de desestabilización que se dio en los años noventa y principios del siglo XXI.

No es cierto como dice el uribismo que en Colombia estemos ante una guerra similar o peor que antes de los pactos de paz, ni que las disidencias de las FARC EP tengan posibilidad de reagruparse para repetir la historia de insurgencia. El futuro de las estructuras armadas de-



<sup>137</sup> Ver mapa en el anexo al final del libro.

pende de muchos factores y entre ellos de la efectividad del Estado en la implementación de los pactos de paz, en los planes socio económicos democráticos de gran alcance en las regiones, del avance en las negociaciones con el ELN y en estrategias de desmantelamiento de narco-paras, paramilitarismo, mafias con estructuras macro criminales y en más amplios consensos y movilización por la paz y la democracia. El obstáculo mayor para una transición más rápida al post-conflicto es la fuerte oposición a los acuerdos de paz desde el partido de gobierno, la ofensiva de la ultraderecha para recuperar terreno perdido y estrategias similares a la “segu-

ridad democrática” dentro de las Fuerzas Armadas y el énfasis en los enfoques de seguridad antiterrorista y de acción integral desde lo militar y no desde la seguridad humana. Si no se consolida una gran alianza política y social de movilización por la paz que se exprese también en los gobiernos territoriales, ni se aíslan la estigmatización y los discursos del odio, la transición al post-conflicto será más difícil y traumática y las confrontaciones armadas, desplazamiento forzado y asesinato de líderes y lideresas tendrán mayor espacio en las regiones.

